



Isidoro Cheresky  
(compilador)

prometeo  
libros

## La política después de los partidos

*Isidoro Cheresky*

La fortaleza de los partidos políticos ha sido considerada un signo distintivo de la vigencia de la democracia, uno de sus pilares, junto con la regularidad de las elecciones. Los totalitarismos que tuvieron su momento de expansión en el siglo XX eran regímenes de opresión y ausencia de libertades públicas y aun de regimentación de la vida privada, y una de sus características era que el poder se sostenía en un partido único; no había en realidad partidos políticos, es decir, partes en competencia, puesto que la organización existente encarnaba al todo social. Los regímenes populistas se han caracterizado por estar sustentados en movimientos colectivos que, sin llegar a la absorción de todas las actividades públicas por el régimen, como en el caso de los totalitarismos, tendían a identificar al movimiento con la totalidad del pueblo y con la Nación y a subestimar la legitimidad del poder proveniente de la consagración electoral, en provecho de un principio de legitimidad superior: el del líder plebiscitado por las masas. De modo que los partidos políticos se constituyeron en sinónimos de la competencia política y del pluralismo en la vida pública, pues su ausencia hacía inconcebible incluso la concreción del acto básico de la institucionalidad democrática, la realización de elecciones competitivas.

Pero, a decir verdad, los partidos políticos modernos no nacieron con las democracias. Éstas, en sus fases iniciales, esbozaron una ciudadanía y una vigencia de derechos que aparecerían como limitados para la mirada contemporánea, y la competencia política tenía como protagonistas a los *notables*, es decir, emergentes de distinciones sociales, y a corrientes de opinión o intereses. Los partidos políticos, que serían más tarde característicos de la política democrática, nacieron hacia fines del siglo diecinueve y alcanzaron su esplendor en el siglo veinte como partidos de

masas, sustentados en la realidad sociológica de la época industrial y en las disputas ideológicas que dieron intensidad a la vida política.

Se puede constatar, tomando en consideración la variedad de realidades contemporáneas, que los partidos están dejando de ser, o ya no son, lo que eran. En la Argentina, bajo una modalidad específica, pero en sintonía con procesos análogos que se verifican en otras sociedades occidentales, los partidos ya no son los principales organizadores de la vida política y, aunque continúan siendo un componente ineludible de la misma puesto que son los vehículos de la competencia electoral, no son más, o están dejando de ser, la expresión de pertenencias ciudadanas permanentes, en otros términos, de identidades políticas. Algunas etiquetas partidarias continúan una existencia centenaria y otras se crean y tienen una existencia más efímera, aunque la cantidad de rótulos que compiten electoralmente se haya multiplicado. Pero los partidos agrupan cada vez menos a los ciudadanos de un modo durable, son estructuras con un sustento social cada vez más precario –si es que tienen alguno– que deben competir en cada turno electoral para conquistar las preferencias ciudadanas. Las democracias occidentales del hemisferio norte parecen evolucionar en la misma dirección, si bien los partidos tienen un peso mayor sobre todo porque para los ciudadanos cuenta todavía la identidad partidaria y ello hace cierto contrapeso a la emergencia de líderes personalistas.

Este tema es de difícil tratamiento en los estudios políticos. La crisis de la relación representantes-representados es generalmente admitida en los análisis políticos de las más variadas orientaciones. Pero en cuanto se la considera, no como una crisis episódica, sino como el signo de una “metamorfosis” o “mutación” de la representación, es decir, como una transformación hacia otros vínculos en la comunidad política caracterizados por un papel central de los liderazgos mediáticos en la constitución de identidades políticas o por la presencia directa de los ciudadanos, quienes en ciertas circunstancias parecen preferir auto-representarse, se levantan las sospechas y las reservas no sólo de quienes pueden verse afectados por ese diagnóstico sino también de numerosos académicos. ¿Constatar una mutación en los vínculos básicos de las democracias contemporáneas no sería acaso abandonar la prédica por el fortalecimiento de las instituciones que garantizaban su mejor calidad, y abandonarse entonces a un realismo cómplice de la degradación de la vida política?

La perspectiva en que se inscriben las contribuciones contenidas en este volumen es la de favorecer la actualización conceptual en el estudio

de las democracias contemporáneas, y en particular de la Argentina. Aceptar ese desafío es lo que inspira también estas líneas introductorias.

## I- Política y partidos

Los partidos de masas que fueron característicos de la democracia en el siglo XX ya no están a la orden del día. Las organizaciones partidarias, en términos generales, han perdido su función representativa, convirtiéndose en dispositivos institucionales que se ofrecen como canales de la competencia política, es decir, depositarios de lazos de identificación acotados o circunstanciales. Algunas de estas organizaciones mantienen características de cohesión similares a las de los partidos del pasado aunque con sustento social y militante reducido, en tanto que las organizaciones y redes más recientes giran en torno a liderazgos personales. Pero en todos los casos los partidos “ya no son partidos”, en el sentido de que no concitan lazos identitarios duraderos y masivos.

Al haberse transformado en dispositivos privados con poco sustento social, incluso en agencias semi-estatales –es decir que habiendo sido emergentes de la sociedad y mediadores entre sociedad civil y Estado se habrían convertido en dispositivos públicos sostenidos por el Estado (partidos conformados por profesionales, no por asociaciones ni por militantes de pura convicción)–, los partidos no son representativos en el sentido tradicional o agentes de “agregación de intereses”, según la expresión acuñada por los científicos políticos norteamericanos, sino que adquieren una independencia o disociación de un sustento social que no se verificaba antaño. Para estos nuevos partidos instrumentales no se trata tanto de conservar adherentes –como era el caso en el pasado–, sino de conquistar un electorado. La función estructurante de los partidos y dirigentes es mucho mayor, y ello es así o porque han perdido la base social o porque el lazo representativo se ha debilitado enormemente.

Pero esta mayor libertad y autonomía, sobre todo de los dirigentes, no incrementa de un modo permanente sus capacidades; por el contrario, en la medida en que no tienen una “base cautiva”, organizacional o personal, están a merced de la reproducción de su legitimidad en el espacio público. Si mantienen su popularidad, seguramente mantendrán el apoyo parlamentario y el control de los resortes institucionales; si, en cambio, su popularidad se debilita, pueden tener problemas institucionales u otros, directamente derivados de la movilización ciudadana o popular.

La institución partidaria se ha transformado en su dimensión organizacional. En los partidos y los movimientos de masas, esa institución

involucraba una dinámica que incluía dirigentes y dirigidos e inclusive establecía reglas de conformación de los dirigentes, regida por la institución. Eran instituciones centrales en el juego político porque en buena medida habían absorbido los canales de la representación política, y, en general, no había vida política por fuera de los partidos políticos o desvinculada de ellos. Es decir, la carrera política para quienes tenían esa vocación comenzaba generalmente por los peldaños inferiores de la estructura partidaria; existían canales y escalones y no era concebible llegar a las candidaturas y a la representación o al poder si no era por esa vía, salvo en periodos excepcionales. Para ser candidato, se debía representar a un partido, y era éste el que recogía las adhesiones ciudadanas.

En la actualidad los partidos políticos son más bien un recurso instrumental, eventualmente sustituible. Son cada vez más dispositivos electorales de los que se valen los líderes o las corrientes políticas emergentes para competir y procurar conquistar la representación. Para ser candidato hoy se necesita un partido, pero éste cada vez menos concita la adhesión ciudadana "per se". Es cada vez más inusual que el elector decida votar por tal o cual partido y cada vez más notoria la selección por el candidato, variando aun según la coyuntura. O sea que la sigla o partido está investida de un sentido presente atribuido por la conformación de la escena pública, por la imagen del candidato, por los enunciados de los candidatos o de la coalición que se ha constituido.

De este modo los partidos han pasado de ser organizadores de la vida pública-política a ser meros intervinientes. No han sido desplazados por otras organizaciones, sino que el espacio público se ha desestructurado o liberado, según como se lo mire, y en él participan una diversidad de actores. La formación de opiniones y preferencias, las identificaciones colectivas, ya no los tienen como actores únicos o, a veces, ni siquiera principales.

Pero, siendo parte de los dispositivos estatales o públicos, carecen por supuesto de la estabilidad de los partidos de masas y de las formas ulteriores con mayor sustento social; están a la merced de la aparición de competidores que puedan reunir los requisitos legales, ya sea como emergentes de tendencias generadas en la sociedad o bien de alternativas surgidas en el propio personal político, cuyas lealtades de grupo se guían por los vaivenes de la opinión y sus demandas. En un espacio público multifacético, las oportunidades para la constitución de nuevas alternativas políticas, o más estrechamente, para la renovación de la oferta electoral, se multiplican.

Por cierto, hay dimensiones diferenciadas de la vida pública y política. La escena nacional tiende a ser el ámbito donde prevalece la lógica de la opinión, donde se constituyen liderazgos de popularidad y donde la comunicación política que da arquitectura a la escena y a las identidades ciudadanas en formación es suministrada por los grandes medios de comunicación. Pero la cotidianeidad local, incluso en los grandes conglomerados urbanos y, más aún en los de menor dimensión, mantiene un registro de sociabilidad política en el que cuentan las estructuras partidarias más tradicionales, las redes de pertenencia subsistentes y el conocimiento directo de líderes vecinales. En los sectores populares la organización vecinal, política o no, constituye con frecuencia, no tan sólo el canal de demandas vinculadas a la subsistencia, sino también de contención ante las contingencias de la vida.

Esta dimensión asociativa popular es tanto más significativa cuanto que la Argentina, como la mayoría de los países de América Latina, está atravesada por una fractura social que delimita un amplio sector de excluidos y pobres transitando en los bordes de la política y del espacio público.

## II- El espacio público, la opinión pública y los electores

El espacio público es característico de las sociedades modernas y en ese sentido no es un ámbito de formación reciente, pero sí lo es la amplitud y la centralidad que ha adquirido. En el espacio público de las democracias contemporáneas no sólo está en juego la legitimidad de la representación originada en los canales institucionales legales, sino que la propia representación se ha ampliado, o ha dado lugar a nuevas pretensiones de representación: se constituyen identificaciones en torno a rechazos y demandas que transitan por canales e identidades *ad hoc* constituidas en ese espacio. Las propias instituciones públicas y la representación legal se adecuan a las evoluciones ciudadanas exteriorizadas en el espacio público.

En los tiempos de la "democracia de partidos" el espacio público era un ámbito de intensa lucha, aunque lucha regida por el sistema de partidos puesto que los actores sociales —asociaciones, sindicatos o movimientos reivindicativos— y los dispositivos públicos —como la prensa gráfica y luego la televisión— estaban, en mayor o menor grado, subordinados a la divisoria de campos delineada por el sistema de partidos. De modo que lo público-político era un ámbito de movilización de recursos ya adquiridos y de exhibición de relaciones de fuerza más que de deliberación y persuasión. Los cambios de lealtad eran marginales. El espacio

público de las sociedades contemporáneas es sustancialmente diferente, está poblado de ciudadanos cambiantes en sus adhesiones políticas y es, en consecuencia, un ámbito de conquista de lealtades, de la persuasión propia de la acción comunicativa. La reproducción de la legitimidad para los representantes políticos es, en ese sentido, un desafío permanente.

Pero lo característico de los tiempos presentes es que el espacio público ya no está regulado por las fuerzas partidarias. Es un espacio en el que coexisten diferentes partícipes de la comunicación política y en el que los nuevos partidos procuran impulsar las articulaciones ofrecidas a los individuos ciudadanos. Las encuestas de opinión son la brújula que guía esa articulación, objeto, por supuesto, de manipulaciones variadas, pero que de todos modos en el encuentro entre diferentes agencias terminan por conformar un registro del estado de la opinión, de peso muy significativo para la orientación de los actores políticos. El estado de la opinión construida en el espacio público se ha convertido, entonces, en el punto de referencia sobre el que se desenvuelve la vida política.

La ciudadanía, su pronunciamiento electoral eventual, es la guía para las decisiones de los dirigentes, por oposición a las decisiones en la época de las lealtades permanentes en la que los dirigentes partidarios y corporativos podían negociar sobre la base de un capital político adquirido; los campos de pertenencia e influencia están en continua redefinición. En este contexto, la figura del líder de popularidad es la más apropiada para concitar adhesiones y dramatizar redefiniciones. Los líderes de popularidad tienen más libertad en la medida en que no están restringidos por compromisos corporativos o por el control de instancias dirigentes a las que tengan que dar cuenta de sus actos. Tienen capacidad para instituir o redefinir la identidad política que pretenden liderar, pero aun siendo exitosos no disponen de un capital político seguro. El lazo de representación, como se ha indicado, es contingente y se halla sometido a una permanente recreación.

En regímenes políticos en los que las instituciones y organizaciones que obtenían las lealtades durables se han debilitado u ocupan una posición marginal, los gobiernos afrontan también una nueva situación, encontrándose frente al desafío de una relegitimación continua. El rumbo del gobierno debe tener en cuenta la reproducción de esa legitimidad. Por cierto, según los propios gobiernos, ello se traduce en una relación más simple, la de tomar el estado de la opinión como un mandato, o más compleja, la de procurar una relación más creativa de representación. Pero la ciudadanía misma o, más modestamente, la opinión, aparece como el sostén o la amenaza para el poder.

Esta centralidad del espacio público y la opinión ha tenido consecuencias en el formato de las democracias contemporáneas. En el pasado, la conflictividad, fuente de cambios de orientación de los gobiernos o de crisis que aparejaban la inestabilidad y eventualmente la caída de los presidentes, tenía como foco el gobierno dividido (Presidente y Congreso con signos políticos distintos el uno del otro); ahora los gobiernos aparecen cuestionados en el espacio público, y es ésta la fuente de inestabilidad temida.

Lo que jaquea a los presidentes debilitados no es la minoría en el Congreso ni los realineamientos parlamentarios, sino los estallidos populares o ciudadanos, según los casos. Y la representación parlamentaria se realinea según los virajes en el estado de ánimo ciudadano.

La amenaza para los presidentes en caída de popularidad ha sido, pues, la calle. Se ha mencionado en diferentes circunstancias la presunta manipulación de la calle que se haría en vistas a la pura desestabilización. Pero lo cierto es que esos estallidos marginales no tienen con frecuencia organizadores claramente identificables, o tienen varios y que en verdad expresan un humor social que ellos mismos no controlan. Esto contrasta con la movilización popular de naturaleza sindical que jaqueaba gobiernos considerados ilegítimos, en el tiempo de las corporaciones, que ahora se han debilitado también bajo el influjo de los vaivenes de la opinión.

La ampliación y fluidez del espacio público se traduce en la gran significación que adquirieron las elecciones como expresión privilegiada de una ciudadanía poco identificada con pertenencias asociativas o corporativas. Pero, por sobre todo, los resultados de las elecciones son generalmente inciertos y, cuando se trata de elecciones presidenciales, suele ponerse en juego la posibilidad de un cambio de rumbo. Las elecciones delimitan el período de mayor intensidad política e ilustran el enraizamiento de principios democráticos en circunstancias muy diferentes a las del pasado.

El ciudadano está ante opciones electorales, y para un número creciente de ellos no es obvia la decisión del voto. La época en que se discutía sobre voto estratégico y voto sincero era aquella en que las identidades eran más permanentes y ése era un tipo de fluctuación ligado a consideraciones de circunstancia; era como que cada votante tenía ciertas preferencias y de lo que se trataba era de una coherencia con ellas, que a veces suponía elegir el mal menor, es decir, reconocer la opción mejor en un campo de opciones (como se ha indicado, esto sucedía en términos electorales, sobre todo en donde no regía el sistema de representación proporcional).

La fluctuación del voto, entonces, ya no es la misma. En el pasado se producía porque había quienes renegaban de su identidad, conducta que no era usualmente muy frecuente. La evolución de los electorados se producía a lo largo del tiempo. Los individuos comunes, infrecuentemente, pero sí a veces, mostraban su descontento absteniéndose o votando en blanco, o incluso votando por otro partido (generalmente, no el opuesto a sus preferencias). Era considerado un electorado propenso a volver al redil. En la "Democracia de Partidos" las campañas electorales tenían por finalidad más bien movilizar al electorado propio o cautivo, que convencer a los alineados en el campo adverso.

La actual fluctuación del voto es un estado continuo, que corresponde mayoritariamente a un electorado no alineado, es decir, que no se identifica permanentemente con una etiqueta partidaria.

Se trata de una fluctuación cuya significación se pone en evidencia por su carácter abarcativo. No sólo fluctúa el voto entre elecciones, sino en el mismo proceso electoral o incluso en el mismo acto electoral, cuando los ciudadanos votan por candidatos de partidos diferentes según los cargos en disputa. Las trabas a la electividad se hacen insostenibles y, en ese sentido, debe interpretarse la crítica a "la lista sábana". Ésta era la fórmula tradicional del voto partidario y programático, que ahora se ve cuestionada justamente porque cada vez más se reclama tomar en consideración al candidato, en tanto que otorgar la confianza a la etiqueta partidaria que supone el voto a una lista es visto como una entrega de las decisiones a los dirigentes. Se considera que los mismos, a través de su rol mediador y negociador, confeccionan listas y construyen lealtades vividas por los individuos ciudadanos como trabas al ejercicio más pleno de su libertad.

Esta autonomía ciudadana respecto de los partidos no significa que éstos sean ignorados o considerados superfluos—aunque, por cierto, existe en relación con ellos una distancia de desconfianza— para la institucionalidad democrática. Lo que se ha debilitado, y en muchos casos desaparecido, es la identidad partidaria. Los partidos como proveedores de una cosmovisión, que generaba adhesión permanente y suministraba estabilidad a la escena política, no tienen más vigencia.

¿Qué sucede en este contexto con las divisorias de campos—izquierda y derecha—, que tradicionalmente han organizado la competencia política?

En Argentina, pero también en otras latitudes, esta distinción no fue nunca operante en términos organizacionales, porque salvo en el período en que el Partido Socialista tuvo un peso en los sectores urbanos (básicamente desde su fundación hasta 1945), y alguna otra coyuntura

excepcional (la elección del diputado Palacios y posteriormente el surgimiento del Partido Intransigente), la izquierda ha tenido una posición marginal en el escenario político. Pero era posible reconocer políticas de izquierda que caracterizaban a corrientes, dirigentes o aun decisiones aisladas de los partidos/movimientos tradicionales. ¿Puede decirse que esa distinción sea operante en los tiempos presentes? En los países donde existe una tradición de diferenciación izquierda/derecha, su significación perdura. Cabe acotar, sin embargo, que el ejercicio del poder por la izquierda en el período más reciente de gobierno en los países de América Latina ha sido distinguible de las de otro signo más bien en términos culturales que políticos o sociales.

Podría decirse que algo así como una configuración izquierda/derecha se reformula en relación con la gestión de gobierno y en particular con la política de los años noventa. A ello se agrega una impronta histórica específica que, en el caso de Argentina, atravesó los alineamientos tradicionales, vinculándose al pasado de dictaduras militares y violaciones de los derechos humanos. Pero cabe plantearse la pregunta: ¿qué futuro tiene esta distinción?

El punto consistente del alineamiento de izquierda ha sido la crítica anticapitalista en vistas a una sociedad alternativa. En la medida en que ese horizonte se ha diluido la identidad de izquierda ha corrido la misma suerte. Los proyectos reformistas siguen teniendo eco, y en el caso del auge reciente del llamado centro-izquierda en el Cono Sur se trata de una ilustración: el reclamo de mayor ingerencia y responsabilidad del Estado fue vehiculizado por los partidos de izquierda y afines. Pero constituye más bien un realineamiento reactivo o correctivo (y de reparación histórica), que una estrategia de alternativa. El principio igualitario se identifica con los reclamos de justicia, generalmente alusivos a la extensión de la igualdad ciudadana a ámbitos en que persisten privilegios y corrupción, y, en alguna medida, con reclamos distributivos. Estos últimos tienden a ser encuadrados y en parte subordinados a los objetivos de crecimiento.

El pragmatismo parece más bien connotar la constitución de las escenas políticas. Es la coyuntura, o "la agenda", la que va delineando la diferenciación política, en tanto que el largo plazo no aparece como materia de diferenciación, quizás porque es indescifrable en los tiempos presentes; pero también porque se ha desvanecido la representación de un rumbo estructurado, que sustentaba las diferencias ideológicas. Los principios políticos diferenciadores forman parte de la escena, pero algunos de ellos tienden a ser objeto de apropiación generalizada por todos los actores.

### III- Liderazgos de popularidad

La emergencia de nuevos liderazgos asociados a la expansión del espacio público merece ciertas precisiones.

El individuo/líder es más propicio (que las organizaciones) para una rápida adaptación a las situaciones cambiantes. Este postulado adquiere relevancia cuando los individuos no se sienten ya atados a una pertenencia y, en consecuencia, dejan de ver a los líderes como emergentes de una fracción a la que adhieren ineluctablemente. La adhesión al líder es más directa y menos comprometida. Se expresa como opinión o como voto, pero no requiere participación. La identidad partidaria tenía antes una tradición de mayor formalización, suministraba una pertenencia relacionada con un programa, una tradición, ideales de los cuales eran depositarios una diversidad de individuos.

El vínculo con un líder personal no está desprovisto de significación, pero ésta se cristaliza en una imagen. De algún modo existe una promesa, y seguramente una expectativa de coherencia con la imagen, pero no un programa en el sentido usual de la palabra.

El vínculo líder-ciudadanía evoca, sobre todo en los países de tradición populista, la relación líder/masa, pero en el contexto contemporáneo se trata de un vínculo de naturaleza distinta y, en cierto sentido, opuesto: a una configuración comunitarista se le opone una de tipo individualista. Los componentes opresivos de la relación populista clásica (que se vehiculizaban por una cadena de mandos políticos, de organizaciones de encuadre y de represión de los disidentes) aparecen debilitados del mismo modo que la vocación totalizadora de los movimientos pierde significación. El liderazgo de popularidad es, sobre todo, mediático.

Este poder ejercido a distancia provee enormes recursos a los líderes de popularidad y genera un espacio específico: el del estilo personal. No es que el líder populista no imprimiera sus rasgos de personalidad a la acción pública. Pero debe tenerse en cuenta, por una parte, que ella se trasuntaba en la estructura del movimiento, lo que en algún aspecto disimulaba, pero también condicionaba o alteraba, la impronta del jefe. Por otra parte, los líderes de popularidad a los que nos referimos se instalan en el contexto de sociedades democráticas con expectativas de legalidad e institucionalidad, y más aún en el caso de sociedades con pasado populista intenso. El estilo personal, entonces, aparece asociado al arbitrio del líder, a la concentración del poder y a la ausencia de deliberación.

De modo que el líder de popularidad no es sólo el referente de legitimidad, aquel que ha sido legitimado para gobernar y relega implícitamente a un segundo plano a sus allegados, aun aquellos que participan de responsabilidades representativas por el voto popular. Es también el que produce actos de gobierno soberanos. Sus decisiones combinan un sentido de la acción pública derivada de los resultados prácticos de la misma, con un estilo de decidir, anunciar y connotar que es tan importante como esos resultados prácticos, y que con frecuencia precipita otras consecuencias prácticas.

El ejercicio de poder concentrado, el decisionismo y el voluntarismo suelen tener apoyo ciudadano y reforzar la popularidad. En ciertos sectores puede existir un componente de subordinación autoritaria tradicional, pero lo dominante parece ser una expectativa más desencantada.

Con frecuencia, el líder de popularidad es visto como "el defensor del pueblo" ante los poderosos, los corruptos y las corporaciones. La popularidad del líder de popularidad suele ser el resultado de un balance implícito en el que los ciudadanos privilegian aquello que les parece esencial, y lo ponen en la perspectiva de la escena política en su conjunto. El líder de popularidad suele ser tributario de sus actos populares y también del desmérito de sus adversarios.

Se percibe, pues, una fragilidad del liderazgo de popularidad que ha sido bien ilustrada en la historia argentina reciente. El ascenso y caída de líderes, como Alfonsín y Menem, que encarnaron fuertemente un momento histórico, da toda la medida de lo acotado de la popularidad a la que nos referimos y permite distinguirla claramente del liderazgo populista.

Se hace necesario aclarar a qué aludimos con la expresión "líderes de popularidad". Los liderazgos de popularidad que vemos surgir en las sociedades contemporáneas, y en particular en la región, difieren de los liderazgos populistas del pasado, y no tan sólo porque emergen del voto ciudadano y se someten regularmente a la renovación de mandato, sino porque ejercen el poder en sociedades en las que rigen las libertades públicas.

El vínculo político del que derivan su poder es también sustancialmente distinto porque no conforman una "masa" de seguidores ni disponen generalmente de soportes corporativos leales, como era el caso de los líderes de antaño.

En lugar de sustentarse en la masa homogeneizada del pasado se apoyan en una ciudadanía de expresión múltiple. Por cierto, lo común entre el pueblo populista de otrora y la ciudadanía contemporánea, al menos en su estadio de opinión pública, es la existencia de un vínculo directo

con el líder, que en otros tiempos tenía la intensidad política provista por la experiencia de la reunión pública, hoy por hoy infrecuente o inexistente.

De modo que los contemporáneos líderes de popularidad no cuentan con seguidores imbuidos de la entrega hacia el líder carismático. Existe, por cierto, una identificación con la persona del líder, pero ella está sometida a la exposición permanente en el espacio público y a la puesta a prueba cotidiana de los sustentos de legitimidad, por lo que la ambivalencia del vínculo es más evidente que en otros casos. Es decir, el líder es preferido, pero hay otras figuras, e incluso la preferencia nacional puede coexistir con una preferencia política local que no sea homogénea o completamente compatible.

A veces, el líder expresa un reclamo postergado, con mayor frecuencia un rechazo o, más vagamente, un malestar social, y está llamado a suplir una vacancia en la representación.

Líderes de popularidad son, entonces, en primer lugar, aquellos que están sostenidos en la opinión pública por una relación directa con ella, que han ganado elecciones o son competitivos en ellas y cuyo poder proviene, en consecuencia, de esa fuente decisiva en las sociedades democráticas.

El personalismo político ha adquirido una nueva significación en el contexto de la crisis de representación. Nuevos o renovados líderes han podido darse un perfil que ha capturado las simpatías ciudadanas y han revalidado o reconstituido así las identidades políticas. Se han desarrollado en situaciones en las que los partidos tradicionales y sus dispositivos para la acción pública se han revelado inadecuados. Por ello, los líderes de popularidad, sean o no sean jefes formales de los partidos y coaliciones con las que compiten electoralmente, han subordinado a las estructuras. Su poder deriva de su crédito en la ciudadanía y no del control de recursos organizacionales, aunque éstos son un requisito para el acceso al poder y para gobernar.

Los liderazgos nacionales tienen una escena privilegiada de emergencia: la competencia en la carrera presidencial. Es a partir de ella que se configura la escena con fuerzas políticas que suelen variar de una elección a la otra. El debilitamiento de las identidades políticas tradicionales se ha mostrado propicio para que se produzcan realineamientos en torno de los candidatos principales. El presidencialismo, por lo tanto, ha sido un formato activador y renovador de la competencia política.

La expansión de los liderazgos de personalidad plantea problemas ciertos en cuanto a la evolución futura de los regímenes democráticos en

Argentina y en América Latina. La desinstitucionalización alcanza no sólo a los partidos políticos, que se desagregan, y a las instancias representativas, que ven su rol disminuido, sino que con frecuencia alcanza también a la justicia y a las esferas administrativas del Estado. De este modo, la concentración de poder en el líder es creciente, dando cabida a la posibilidad de decisiones arbitrarias. A la debilidad o ausencia de un partido de pertenencia, con pares a los cuales dar cuenta, se suma la debilidad de las instituciones de contralor administrativo o de las instancias judiciales.

Pero no se trata tan sólo de la omnipotencia de la función presidencial. La concentración de poder está generalmente acompañada de un empobrecimiento del debate público. El gobierno se ve poco incitado a exponer sus argumentos, tomar en cuenta las críticas y las reacciones ciudadanas, de modo que las decisiones no son maduradas en la deliberación. Los presidentes con concentración de poder suelen decidir por sorpresa y buscar posteriormente adhesión ciudadana a sus actos de gobierno.

Al mismo tiempo estos presidentes con gran poder adolecen de una enorme debilidad, pues sus condiciones de emergencia son las de la "democracia inmediata". La ciudadanía evoluciona hacia una creciente autonomía, lo que quiere decir que sus identificaciones son cambiantes y esto es así tanto para sus pertenencias corporativas o políticas como para su adhesión a líderes. Como se ha señalado precedentemente, un rasgo dominante de la evolución política contemporánea es el de la expansión del espacio público y el de la multiplicidad de voces virtuales y reales, que en él se cruzan y a las que finalmente los gobernantes no pueden sustraerse. De modo que estos líderes emergentes, estos presidentes de poder concentrado, no pueden constituir estructuras de hegemonía en la medida que se hallan ellos mismos sometidos al veredicto de la opinión, que es el anticipo del veredicto electoral y, en ocasiones, también de estallidos de descontento que pueden forzarlos a alejarse del poder prematuramente.

El desafío para las nuevas democracias y, para las antiguas probablemente también, es encontrar la manera de consolidar un marco institucional general que evite una excesiva concentración de poder, y adaptar las instituciones representativas y políticas a la irreversible mutación que se ha producido en la vida pública de nuestras sociedades.